

Mediante Memorandum Electrónico N.º 00012-2010-3E0100 de la División de Asesoría Legal de la Intendencia de Aduana Aérea del Callao, se formula una consulta referida a la forma de notificar resoluciones de multa por infracciones cometidas por sucursales de empresas no domiciliadas en el país, que se encuentran extinguidas.

En el referido documento se adjunta el Informe N.º 242-2009-SUNAT-3E0100, en el cual se cita el Informe N.º 330-2008-3E1200 de la División de Manifiestos, donde se señala que las multas en cuestión serían multas aplicadas a un transportista por la comisión de la infracción prevista en el numeral 2) del inciso a) del artículo 103º de la Ley General de Aduanas, aprobada por el Decreto Legislativo N.º 809, y que habrían sido determinadas con fecha posterior a la fecha de extinción de la sucursal de la empresa extranjera.

En ese sentido, no obstante que no se precisa la fecha de comisión de la infracción, debe entenderse que la aplicación de la sanción se encontraba dentro del marco legal establecido por la Ley General de Aduanas aprobada con Decreto Legislativo N.º 809, en la que la citada infracción del numeral 2) del inciso a) del artículo 103º, se configura cuando el transportista o su representante *“No entreguen al momento de la recepción por la Autoridad Aduanera, el manifiesto y demás documentos exigidos por el Reglamento o los presenten con errores o no cumplan con las disposiciones aplicables;”*.

De lo manifestado, se desprende que la naturaleza de la sanción de multa referida es tributario aduanera, por lo que se sujeta para su aplicación a las disposiciones de la propia Ley General de Aduanas; sin embargo, respecto de la notificación de las sanciones de multa, debe recurrirse a la norma actualmente vigente, es decir la Ley General de Aduanas aprobada con el Decreto Legislativo N.º 1053, que, no obstante no contener ninguna precisión normativa especial sobre notificaciones, en su Segunda Disposición Complementaria Final remite a la aplicación supletoria de las disposiciones del Código Tributario.

Cabe anotar, que en el caso de una sucursal en el Perú de una sociedad extranjera, el artículo 396º de la Ley General de sociedades, Ley N.º 26887, establece que está dotada de representación legal permanente, por lo que se encuentra obligada a designar a su representante y precisar sus facultades en el poder que le otorgue.

Por su parte, el Código Tributario, aprobado con el Decreto Supremo N.º 135-99-EF y normas modificatorias, en el Libro Tercero, de los Procedimientos Tributarios, contiene las regulaciones para las notificaciones de los actos de la Administración Tributaria; y, específicamente en el inciso e) del numeral 2) de su artículo 104º, referido a las formas de notificación, dispone que cuando el domicilio del representante de un no domiciliado fuera desconocido, la SUNAT podrá realizar la notificación mediante la publicación en la página web de la SUNAT o, en el Diario Oficial o, en el diario de la localidad encargado de los avisos judiciales o en su defecto, en uno de mayor circulación de dicha localidad.

De acuerdo con lo expuesto, la naturaleza jurídica de los actos de la Administración Tributaria cuya notificación se pretende, determina la aplicación del marco normativo especial previsto en el Código Tributario, no existiendo ningún vacío para tal efecto que requiera de la aplicación supletoria de las disposiciones del numeral 23.1.2 del artículo 23º de la Ley N.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ahora bien, lo señalado precedentemente establece claramente el procedimiento de notificación que es posible seguir en un caso como el planteado en la consulta; sin embargo,

ello no significa que la continuación del proceso de cobranza, incluida la etapa de ejecución coactiva, puedan llegar a tener éxito, teniendo en cuenta que la casa matriz de la sucursal extinguida no obstante ser responsable de sus obligaciones, se encuentra en el extranjero, situación que al no ser de carácter legal, no se encuentra dentro del ámbito de competencia de la Gerencia Jurídico Aduanera, y respecto de la cual, corresponderá adoptar las decisiones pertinentes a la autoridad que resulte funcionalmente responsable.

Cabe acotar, que las regulaciones generales para garantizar la cobranza de deudas de naturaleza tributaria aduanera se encuentran establecidas también en el Código Tributario, el mismo que incluso contempla en su artículo 27° numeral 5), una modalidad de extinción de la obligación tributaria sobre deudas que la autoridad competente considere que son de cobranza dudosa o de recuperación onerosa.

Las deudas de cobranza dudosa son aquéllas que constan en las respectivas Resoluciones u Órdenes de Pago y respecto de las cuales se han agotado todas las acciones contempladas en el Procedimiento de Cobranza Coactiva, siempre que sea posible ejercerlas.

Las deudas de recuperación onerosa son aquéllas que constan en las respectivas Resoluciones u Órdenes de Pago y cuyos montos no justifican su cobranza; y, aquellas que han sido autoliquidadas por el deudor tributario y cuyo saldo no justifique la emisión de la resolución u orden de pago del acto respectivo, siempre que no se trate de deudas que estén incluidas en un aplazamiento y/o fraccionamiento de carácter general o particular.

Atentamente.